

RESOLUCIÓN No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL.

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL PÁRAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus facultades establecidas en las leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, Decreto- Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, las demás normas complementarias y,

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

I. SITUACION FÁCTICA

Que en atención a la queja con radicado SCQ – 133-0214 del 09 de febrero de 2021, en la cual se informaba "Construcción de una vía interna y tala de bosque nativo" se realizó visita técnica el día 22 de febrero de 2021 generándose el Informe Técnico de Queja IT – 01153 del 02 de marzo de 2021, donde se verificaron las condiciones ambientales del lugar objeto de la queja.

II. INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

Que mediante Auto AU – 02326 del 15 de abril de 2021, notificado por aviso el día 03 de mayo de 2021, la Corporación impuso medida preventiva de suspensión inmediata de actividades de apertura de vías internas y de tala, que se adelantaban en el predio ubicado en la vereda Carrizales del municipio de Abejorral, identificado con PK 0022001000002100025 y Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 002-5711, en un sitio con coordenadas X: -75° 21'8.70" Y: 5° 46'52.6" Z: 2488 m.s.n.m, y se dio inicio al procedimiento sancionatorio ambiental, en contra del señor **JORGE ALBERTO ARANZAZU ARANZAZU**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.786.675 y el señor **FERNANDO ANTONIO RIOS BETANCUR**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.782.260, por los hechos evidenciados y plasmados en el Informe Técnico de Queja IT – 01153 del 02 de marzo de 2021. Teniendo como hecho materia de investigación la tala e incumplimiento al Acuerdo Corporativo 265 de 2011, sin los respectivos permisos por parte de la Autoridad Ambiental.

III. FORMULACIÓN DE CARGOS

Que una vez evaluado el contenido del Informe Técnico IT – 01153 del 02 de marzo de 2021 e Informe Técnico IT – 03448 del 11 de junio de 2021, consideró este Despacho que se encontraron los elementos propios de la responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño, el

actuar doloso o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su fundamento en la conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal existe.

Al respecto en la Sentencia C-595 ha expresado la Corte Constitucional¹: “(...) La Corte considera que la presunción general establecida se acompasa con la Constitución toda vez que no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-.

Los párrafos demandados no establecen una “presunción de responsabilidad” sino de “culpa” o “dolo” del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333).

No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales”

(...)

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 2009, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la Autoridad ambiental Competente.

Que una vez determinado lo anterior este Despacho profirió Auto AU – 02825 del 24 de agosto de 2021, notificado por aviso el día 02 de septiembre de 2021, mediante el cual se formuló pliego de cargos en contra del señor **JORGE ALBERTO ARANZAZU ARANZAZU**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.786.675 y el señor **FERNANDO ANTONIO RIOS BETANCUR**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.782.260, de la siguiente manera:

CARGO ÚNICO: Aprovechamiento Forestal de aproximadamente 0,04 hectáreas de bosque en estado de sucesión secundaria con especies nativas como Uvitos, Gavilanes, entre otros, afectando el recurso hídrico, el recurso suelo y el recurso flora; actividad realizada en el predio ubicado en la vereda Carrizales del municipio de Abejorral, identificado con PK 00220010000025 y Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 002-5711, en un sitio con coordenadas

¹ Sala Plena Corte Constitucional. (27 de julio de 2010) Sentencia C-595/10. [MP Jorge Iván Palacio Palacio.]

X: -75°21'8,70" Y: 5°46'52,6" Z: 2488 m.s.n.m, sin los respectivos permisos de la Autoridad Ambiental competente, en contravención a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.1.1.5.6. "Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización".

Lo anterior fue evidenciado por funcionarios de Cornare el día 22 de febrero de 2021, en visita que se registró mediante Informe Técnico IT - 01153 del 02 de marzo de 2021.

IV. DESCARGOS

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un término de (10) diez días hábiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito.

Que los presuntos infractores, mediante escrito con radicado CE – 15482 del 08 de septiembre de 2021, presentaron escrito de descargos en el cual, no solicitaron pruebas ni desvirtuaron las existentes en contra del Auto AU – 02825 del 24 de agosto de 2021 y por el contrario asumieron su responsabilidad frente a los hechos materia de investigación.

V. INCORPORACIÓN DE PRUEBAS.

Que mediante Auto AU – 03192 del 23 de septiembre de 2021, notificado por aviso fijado el día 13 de octubre y desfijado el día 20 de octubre de 2021, se incorporó como pruebas al presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental los siguientes:

1. Queja con radicado SCQ – 133-0214 del 09 de febrero de 2021.
2. Informe Técnico de Queja IT – 01153 del 02 de marzo de 2021.
3. Consulta Ventanilla Única de Registro (Vur) FMI N° 002-5711. (15/04/2021).
4. Informe de Control y Seguimiento IT – 03448 del 11 de junio de 2021.
5. Escrito de descargos CE – 15482 del 08 de septiembre de 2021.

Que así mismo con la actuación en comento, se procedió a dar por agotada la etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra del señor **JORGE ALBERTO ARANZAZU ARANZAZU**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.786.675 y el señor **FERNANDO ANTONIO RIOS BETANCUR**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.782.260 y se dio traslado para la presentación de alegatos, los cuales fueron presentados por los investigados mediante escrito con radicado CE – 18493 del 25 de octubre de 2021, en el cual informan sobre las acciones ejecutadas en atención a la intervención realizada y el registro fotográfico del material vegetal sembrado como medida de compensación y mitigación ambiental.

VI. CONSIDERACIONES FINALES

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente **05.002.03.37843**, a partir del cual se concluye que el cargo establecido en el Artículo Primero del Auto AU – 02825 del 24 de agosto de 2021, está llamado a prosperar, por lo que se evidencia que no se configura ninguna de las causales de eximentes de responsabilidad consagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los

eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al respecto, en las conductas descritas en los cargos que prosperaron no es evidente la presencia de hechos imprevisibles e irresistibles.

Así mismo ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este no desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se establece una “presunción de responsabilidad” sino una presunción de “culpa” o “dolo” del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación está, que una vez valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental.

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona (Natural o Jurídica) de forma tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y métodos establecidos para tal fin.

VII. FUNDAMENTOS LEGALES

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, conocida también como la Constitución Ecológica, que elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el artículo 79 superior que señala: *“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.”*

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”

Es un derecho, pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Sobre la competencia de las Corporaciones Autónomas la Ley 99 de 1993 en su Artículo 30º *“Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.”*

En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone *“Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las*

de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.

Artículo 5o. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

Parágrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión.

VIII. DOSIMETRÍA DE LA SANCIÓN

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en multa al señor **JORGE ALBERTO ARANZAZU ARANZAZU**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.786.675 y al señor **FERNANDO ANTONIO RIOS BETANCUR**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.782.260, por estar demostrada su responsabilidad en el Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental, de acuerdo a los cargos formulados en el Auto AU – 02825 del 24 de agosto de 2021.

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones que se deben imponer al infractor de las normas de protección ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por la misma ley.

En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables se le podrá imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 2010.

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde a la gravedad de la infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decisión que conlleve la imposición de una sanción administrativa al seguir las siguientes instrucciones:

“Ley 1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.”

Que en virtud a lo contenido en el artículo 2.2.10.1.1.2., del Decreto 1076 de 2015, se generó el Informe Técnico IT – 08735 del 27 de diciembre de 2023, en el cual se establece lo siguiente:

“(…)”

a. Procedimiento Técnico

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 2086 de 2010, la tasación de la multa se basa en los siguientes criterios definidos en la fórmula matemática:

$$\text{Multa} = B + [(\alpha * i) * (1 + A) + Ca] * Cs$$

B: Beneficio ilícito

α : Factor de temporalidad

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor

“(…)”

18.METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2086 DE 2010				
Tasación de Multa				
Multa =	$B + [(\alpha * R) * (1 + A) + Ca] * Cs$	TIPO DE HECHOS:	CONTINUOS	JUSTIFICACIÓN
B: Beneficio ilícito	B=	$Y * (1 - p) / p$	272.557,50	
Y: Sumatoria de ingresos y costos	Y=	$y1 + y2 + y3$	181.705,00	

	y1	Ingresos directos	0,00	No se tiene
	y2	Costos evitados	181.705,00	Por el área intervenida se establece que el número de individuos es de 44 de manera aproximada. Circular 0003-2021
	y3	Ahorros de retraso	0,00	No se tiene
Capacidad de detección de la conducta (p):	p baja=	0.40	0,40	No tiene permisos y se encuentra retirado de la vía terciaria
	p media=	0.45		
	p alta=	0.50		
α : Factor de temporalidad	α =	$((3/364)*d) + (1-(3/364))$	1,00	
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365).	d=	entre 1 y 365	1,00	Un hecho instantáneo
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación	o=	Calculado en Tabla 2	0,40	
m = Magnitud potencial de la afectación	m=	Calculado en Tabla 3	35,00	
r = Riesgo	r =	$o * m$	14,00	
Año en el que se realiza la tasación	año		2.023	
Salario Mínimo Mensual legal vigente	smmlv		1.160.000,00	
R = Valor monetario de la importancia del riesgo	R=	$(11.03 \times \text{SMMLV}) \times r$	179.127.200,00	
A: Circunstancias agravantes y atenuantes	A=	Calculado en Tabla 4	0,00	
Ca: Costos asociados	Ca=	Ver comentario 1	0,00	
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor.	Cs=	Ver comentario 2	0,03	
CARGO ÚNICO: Aprovechamiento Forestal de aproximadamente 0,04 hectáreas de bosque en estado de sucesión secundaria con especies nativas como Uvitos, Gavilanes, entre otros, afectando el recurso hídrico, el recurso suelo y el recurso flora; actividad realizada en el predio ubicado en la vereda Carrizales del municipio de Abejorral, identificado con PK 00220010000025 y Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 002-5711, en un sitio con coordenadas X: -75°21'8,70" Y: 5°46'52,6" Z: 2488 m.s.n.m, sin los respectivos permisos de la Autoridad Ambiental competente, en contravención a lo establecido en el Decreto 1076 de 201, artículo 2.2.1.1.5.6. "Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización". Lo anterior fue evidenciado por funcionarios de Cornare el día 22 de febrero de 201, en visita que se registró mediante Informe Técnico IT - 01153 del 02 de marzo de 2021.				
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (I)				
$I = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC$			14,00	JUSTIFICACIÓN
IN = INTENSIDAD Define el grado de incidencia de la	entre 0 y 33%.	1	1	El área de intervención presenta coberturas en estado sucesional y en una porción muy baja del predio, no había especies en veda.
	entre 34% y 66%.	4		

acción sobre el bien de protección.	entre 67% y 99%.	8		
	igual o superior o al 100%	12		
EX = EXTENSIÓN Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno.	área localizada e inferior a una (1) hectárea	1	1	Área 0,04 hectáreas
	área determinada entre una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas	4		
	área superior a cinco (5) hectáreas.	12		
PE = PERSISTENCIA Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción.	Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses.	1	3	Por el tipo de cobertura vegetal intervenida y por la extensión, el afecto se manifestaría entre los 6 meses y cinco años
	La afectación no es permanente en el tiempo, plazo temporal de manifestación entre seis (6) meses y cinco (5) años.	3		
	El efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo, de los bienes de protección o cuando la alteración es superior a 5 años.	5		
RV = REVERSIBILIDAD Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente.	Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en un periodo menor de 1 año.	1	3	Para recuperar la cobertura vegetal se establece un tiempo entre 1 y 10 años
	La alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en el mediano plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio. Es decir, entre uno (1) y diez (10) años.	3		

	<i>la afectación es permanente o se supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a sus condiciones anteriores. Corresponde a un plazo superior a diez (10) años.</i>		5		
MC = RECUPERABILIDAD Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión ambiental.	<i>Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses.</i>		1	3	Con medidas de manejo ambiental y el tipo de cobertura y la ubicación se recuperaría la zona en un plazo de 6 a 5 años
	<i>Caso en que la afectación puede eliminarse por la acción humana, al establecerse las oportunas medidas correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración que sucede puede ser compensable en un periodo comprendido entre 6 meses y 5 años.</i>		3		
	<i>Caso en que la alteración del medio o pérdida que supone es imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la acción humana.</i>		10		
TABLA 2					
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (I)					
$I = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC$				14,00	<i>Resultado de la valoración de la importancia de la afectación un escenario hipotético</i>
TABLA 3			TABLA 4		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA AFECTACION (o)			MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACIÓN (m)		
CRITERIO	VALOR		CRITERIO	VALOR DE IMPORTANCIA	(m)
<i>Muy Alta</i>	<i>1,00</i>	<i>0,40</i>	<i>Irrelevante</i>	<i>8</i>	<i>20,00</i>
<i>Alta</i>	<i>0,80</i>		<i>Leve</i>	<i>9 - 20</i>	<i>35,00</i>
<i>Moderada</i>	<i>0,60</i>		<i>Moderado</i>	<i>21 - 40</i>	<i>50,00</i>
<i>Baja</i>	<i>0,40</i>		<i>Severo</i>	<i>41 - 60</i>	<i>65,00</i>
<i>Muy Baja</i>	<i>0,20</i>		<i>Crítico</i>	<i>61 - 80</i>	<i>80,00</i>
					<i>35,00</i>

JUSTIFICACIÓN	<i>Por la ubicación de la zona y la altura que presenta el predio, la recuperación es más lenta y la sucesión intervenida era de más años.</i>		
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES		Valor	Total
<i>Reincidencia.</i>		0,20	0,00
<i>Cometer la infracción para ocultar otra.</i>		0,15	
<i>Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.</i>		0,15	
<i>Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.</i>		0,15	
<i>Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.</i>		0,15	
<i>Obtener provecho económico para sí o un tercero.</i>		0,20	
<i>Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.</i>		0,20	
<i>El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.</i>		0,20	
<i>Justificación Agravantes: No se tiene</i>			
TABLA 6			
Circunstancias Atenuantes		Valor	Total
<i>Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia.</i>		-0,40	0,00
<i>Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor.</i>		-0,40	
<i>Justificación Atenuantes: No se tiene</i>			
CÁLCULO DE COSTOS ASOCIADOS:			0,00
<i>Justificación costos asociados: No se identifica en el expediente</i>			
TABLA 7			
CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR			
1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta la clasificación del Sisbén, conforme a la siguiente tabla:	Nivel SISBEN	Capacidad de Pago	Resultado
	1	0,01	
	2	0,02	
	3	0,03	
	4	0,04	
	5	0,05	
	6	0,06	
			0,03

	<i>Población especial: Desplazados, Indígenas y desmovilizados.</i>	0,01	
2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los ponderadores presentados en la siguiente tabla:	Tamaño de la Empresa	Factor de Ponderación	
	Microempresa	0,25	
	Pequeña	0,50	
	Mediana	0,75	
	Grande	1,00	
3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de capacidad de pago para los entes territoriales es necesario identificar la siguiente información: Diferenciar entre departamento y municipio, conocer el número de habitantes. Identificar el monto de ingresos corrientes de libre destinación (expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes – (SMMLV). Una vez conocida esta información y con base en la siguiente tabla, se establece la capacidad de pago de la entidad.	Departamentos	Factor de Ponderación	
		1,00	
		0,90	
		0,80	
		0,70	
		0,60	
	Categoría Municipios	Factor de Ponderación	
		Especial	1,00
		Primera	0,90
		Segunda	0,80
		Tercera	0,70
		Cuarta	0,60
		Quinta	0,50
Sexta	0,40		
Justificación Capacidad Socio- económica: Una vez verificado al señor JORGE ALBERTO ARANZAZU ARANZAZU , identificado con cédula de ciudadanía número 70.786.675, reporta en la base de datos del SISBEN IV en un nivel C 13 y se encuentra que el usuario figura como titular del derecho real de dominio sobre los inmuebles identificados con FMI N° 002-5711 y 002-11300 localizados en el municipio de Abejorral y 017-64500, localizado en el municipio de La Ceja Antioquia y el señor FERNANDO ANTONIO RIOS BETANCUR , identificado con cédula de ciudadanía número 70.782,260, no reporta en la base de datos del SISBEN IV, sin embargo según la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Adres, figura como cotizante activo a la Eps Superamericana S.A y como titular del derecho real de dominio sobre los inmuebles identificados con FMI N° 002-5711 y 002-481 localizados en el municipio de Abejorral y 017-3630, localizados en el municipio de La Ceja Antioquia; en tal sentido y contrastada dicha información con la escala de ponderación establecida en el artículo 10 de la Resolución N° 2086 de 2010, se encuentra que su CAPACIDAD DE PAGO es de 0,03, en aplicación al Principio de Favorabilidad.			
	VALOR MULTA:	5.646.373,50	
	UVT	\$ 133,13	
19. CONCLUSIONES			
Una vez aplicada la metodología para el cálculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, se establece una multa por un valor de \$5.646.373,50 (Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Tres pesos con Cincuenta centavos).			

Evalúados los elementos de hecho y de derecho y agotado el procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al señor **JORGE ALBERTO ARANZAZU ARANZAZU**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.786.675 y al señor **FERNANDO ANTONIO RIOS BETANCUR**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.782.260, procederá este despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impondrá la sanción correspondiente.

Que es competente para conocer de este asunto, la Directora de la Regional Páramo de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro – Nare, CORNARE. En virtud de la delegación establecida por la Dirección General mediante Resolución Corporativa que la faculta y en mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DECLARAR RESPONSABLE al señor **JORGE ALBERTO ARANZAZU ARANZAZU**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.786.675 y al señor **FERNANDO ANTONIO RIOS BETANCUR**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.782.260, del cargo formulado en el Auto AU – 02825 del 24 de agosto de 2021, por encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO. IMPONER al señor **JORGE ALBERTO ARANZAZU ARANZAZU**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.786.675 y al señor **FERNANDO ANTONIO RIOS BETANCUR**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.782.260, una sanción consistente en **MULTA** por un valor de 133,13 UVT, equivalentes para la vigencia 2023 a \$5.646.373,50 (Cinco millones seiscientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y tres pesos con cincuenta centavos), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo 1º. El señor **JORGE ALBERTO ARANZAZU ARANZAZU**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.786.675 y el señor **FERNANDO ANTONIO RIOS BETANCUR**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.782.260, deberán consignar el valor de la multa impuesta mediante la presente Actuación Administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con código de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma que deberá ser cancelada dentro de los (30) treinta días calendarios siguientes, a la ejecutoria de la presente Actuación Administrativa. De no realizar dicho pago en el término establecido, se causarán los correspondientes intereses de mora.

Parágrafo 2º. De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan mérito ejecutivo; en caso de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva.

ARTÍCULO TERCERO. REQUERIR al señor **JORGE ALBERTO ARANZAZU ARANZAZU**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.786.675 y el señor **FERNANDO ANTONIO RIOS BETANCUR**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.782.260, para que de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, en un término de (30) treinta días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, restauren la zona intervenida, en atención a la zonificación que presenta, realizando como medida de compensación un enriquecimiento forestal. Por lo tanto, deberán plantar especies nativas de importancia ecológica, de acuerdo a las

condiciones de la zona, en una proporción de 1.3 árboles es decir 132 árboles y garantizar su sobrevivencia mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 años.

Parágrafo. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente artículo dará lugar a la imposición de multas sucesivas de conformidad con el artículo 90 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO. COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la Oficina de Gestión Documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co

ARTICULO QUINTO. INGRESAR al señor **JORGE ALBERTO ARANZAZU ARANZAZU**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.786.675 y al señor **FERNANDO ANTONIO RIOS BETANCUR**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.782.260, en el Registro Único Nacional de Infractores Ambientales, RUJA, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión.

ARTICULO SEXTO. PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de CORNARE, a través de la página web www.cornare.gov.co.

ARTICULO SÉPTIMO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor **JORGE ALBERTO ARANZAZU ARANZAZU**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.786.675 y al señor **FERNANDO ANTONIO RIOS BETANCUR**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.782.260. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO OCTAVO. INDICAR que contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



LILIANA ASENED CIRO DUQUE.
Directora Regional Páramo.

Expediente: 05.002.03.37843.

Proyectó: Abogada/ Camila Botero.

Técnico: Juan Fernando Ospina.

Etapa: Sancionatorio. – Resuelve Sancionatorio

Ruta: www.cornare.gov.co/sqi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos

Vigencia desde:

F-GJ-77/V.05

21-Nov-16